

Capítulo 5

Estructura ocupacional y debilitamiento de la clase trabajadora en la posdictadura. Algunos problemas de interpretación

Andrés Cappannini y Juan Pedro Massano*

.....

En el presente capítulo discutimos las interpretaciones de tres de los fenómenos más importantes atinentes a las modificaciones en la estructura social constatadas desde mediados de la década de 1970 hasta finales de la siguiente, y las hipótesis políticas que de ellas se derivaron para explicar las importantes novedades del período.

Tras la salida de la última dictadura militar y la derrota electoral del peronismo en las elecciones de 1983, las ciencias sociales argentinas se dispusieron a dar cuenta de un conjunto de transformaciones en la estructura ocupacional del país, en las cuales buscaban claves para comprender los cambios políticos y en las relaciones de fuerzas entre clases legadas por el período dictatorial.

En las interpretaciones construidas durante la década de 1980 el aspecto «político» se destaca fuertemente debido al rol que la dictadura desempeña en la construcción de las explicaciones. Esta característica

*.- Agradecemos los comentarios que a la versión preliminar hicieron Lorenzo Labourdette, Eleonora Bretal y Alejandro Schneider del proyecto «Cambios y continuidades en el sindicalismo argentino 1955-2010» (FaHCE-UNLP), y Vanesa Ciolli, Rolando García, Igal Kejsefman y Adrián Piva del proyecto «La acumulación de capital en una “estructura dual” y los límites a la construcción de una hegemonía política: Argentina 1955-2015» (UNQ). Por supuesto, los contenidos vertidos en el presente capítulo son entera responsabilidad de los autores.

de las interpretaciones sobre la época tiene su mérito, en la medida en que rescata la voluntad del «Proceso» de operar un cambio estructural y, al mismo tiempo, sitúa el relativo retroceso de los trabajadores durante esos años en términos que van más allá de cambios restringidos a la subjetividad política.

Sin embargo, aún destacando ese aspecto, la mayoría de las interpretaciones se desarrollaron en una tensión irresuelta entre, por un lado, el énfasis en las políticas económicas de la dictadura y/o la crisis de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), y por otro la constatación de que buena parte de las transformaciones que recién entonces se vislumbraban con nitidez, habían comenzado mucho antes de 1976. Al margen de las discusiones específicas acerca de esta tensión, se trata de tendencias que deben situarse en un período de enorme inestabilidad y crisis de la acumulación de capital, en la cual los niveles de inversión agregados fueron bajísimos, y el giro de capitales al exterior como parte de pago de la deuda externa muy considerable.

En esas circunstancias, algunas de las tendencias señaladas por la literatura al nivel de la estructura ocupacional no deberían resultar demasiado sorprendentes. Era poco probable, por ejemplo, que la cantidad de asalariados industriales se expandiera, tanto en términos relativos como absolutos. No es extraño tampoco que la desocupación aumentara, aún cuando los datos oficiales al respecto no dejan de resultar dudosos. Tampoco es del todo extraño que, con la larga crisis como contexto, creciera el peso relativo de ocupaciones irregulares, en pequeña escala y de poca productividad.

Tenemos, entonces, un conjunto de lecturas vinculadas por sus focos de investigación en la estructura ocupacional y sus efectos. En ellas se destacan una primera tanda (Iñigo Carrera y Podestá 1985; Lucita 1989; Mora y Araujo 1983; Nun 1987; Palomino 1988; Torrado 1994, 2010; Villarreal 1985), orientada a describir e interpretar las transformaciones ocurridas fundamentalmente durante la dictadura militar, que presentan a la clase trabajadora como políticamente debilitada y que buscan en las transformaciones de la estructura social las claves, tanto de ese debilitamiento político, como de la derrota electoral peronista en 1983.

En estas lecturas sobresalen un conjunto de transformaciones. Centralmente, la expansión del cuentapropismo, la terciarización y la disminución de la tasa de actividad. Algunas de ellas resultarían, a la larga, fenómenos coyunturales. Otras, en cambio, seguirían profundizándose en años posteriores, aunque quedarían relegadas en la agenda, reemplazadas por otros fenómenos conexos pero diferentes.

Desde fines de la década de 1980, comenzaron a aparecer nuevos problemas: el aumento de la desocupación y la subocupación, el aumen-

to de la precarización laboral, la expansión del sector informal urbano (Beccaria y Orsatti 1990; Cortés 1990; Galin y M. Novick 1990; Pok 1992). Algunos de ellos, como la desocupación, suponían en realidad el aumento de la tasa de actividad, es decir, la reversión de una tendencia que había sido remarcada como de largo plazo. En otros casos, como la precarización laboral, constituía tanto una preocupación como un abordaje novedoso, en torno a una temática que había estado literalmente fuera de agenda. A causa de ello, es bastante difícil la comparación con los períodos previos. A este cambio de agenda contribuyó la expansión de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) como programa de estadísticas laborales públicas por excelencia.

Así, la continuidad de la crisis durante el gobierno de Raúl Alfonsín, incorporó nuevas temáticas a la agenda de investigaciones, a la vez que favoreció la utilización de nuevas categorías de análisis. Sin embargo, profundizó la línea, predominante en las investigaciones de la primera mitad de la década, en torno al debilitamiento de la clase trabajadora y sus organizaciones.

Es importante señalar en este sentido que resulta sustancialmente diferente plantear que la estructura ocupacional representa un factor explicativo principal para pensar cambios en las relaciones de fuerzas, a proponer que esta estructura es un elemento, entre otros, que expresa los cambios sociales y políticos de una etapa de crisis, reestructuración y transición. No tendríamos, así, una argumentación causal lineal (y unidireccional) entre «estructura» y «relaciones de fuerza», sino distintas dimensiones mutuamente influenciadas de un proceso más general de crisis, que en todo caso habría que interpretar en su sentido económico, social y político.

Aquí nos abocaremos al primer conjunto de problemas, los que originalmente dieron la base para sostener una correlación entre modificaciones en la estructura social y modificaciones en el comportamiento político de los trabajadores, y señalaremos una serie de problemas atinentes a los análisis de estos fenómenos derivados tanto de los datos con los que se los aborda, como de los esquemas de interpretación utilizados.

Volver nuestra atención nuevamente sobre estos fenómenos tiene como objetivo dilucidar el alcance que estas transformaciones tenían para justificar que esa correlación constatable implicaba una relación explicativa directa, usualmente orientada como cadena explicativa «modificaciones en la estructura ocupacional-cambio en la relación de fuerzas/debilitamiento de la clase-cambio en los comportamientos políticos», hipótesis que terminó convirtiéndose en un consenso extendido dentro de las investigaciones sobre el período al que nos abocamos.

Nuestro cometido no es negar validez a esos cambios, sino establecer lo más concretamente posible sus magnitudes a fin de comprender los alcances explicativos de estas variables por sí y en su combinación, sobre todo por las lecturas que de ellos se hicieron para explicar cambios políticos. Con esto queremos decir que, si bien las modificaciones en la estructura social pueden tener un peso explicativo en los cambios en las relaciones de fuerzas, es preciso ser cauto a propósito a que:

1. no todos los cambios señalados por la literatura son igualmente importantes en su magnitud, ni constituyen cambios duraderos en la estructura ocupacional (es decir, no todos tienen la misma capacidad explicativa);
2. incluso en el caso de los cambios de mayor magnitud y duración, su interpretación en tanto factores explicativos del cambio en las relaciones de fuerzas entre clases no es en absoluto sencillo;
3. plantear que conjuntamente todos estos cambios afectan las relaciones de fuerzas implica argumentalmente más que meramente constatar si ocurrieron y tuvieron una determinada magnitud;
4. es necesario no unidimensionalizar la explicación sobre los cambios en los comportamientos políticos, a fin de no perder la compleja trama de procesos que afectaron las relaciones de fuerzas y, por lo tanto, la debilidad o fortaleza relativa de los trabajadores.

Desde aquí, avanzaremos discutiendo los problemas antedichos descendiendo desde los conceptos de mayor a menor agregación categorial.

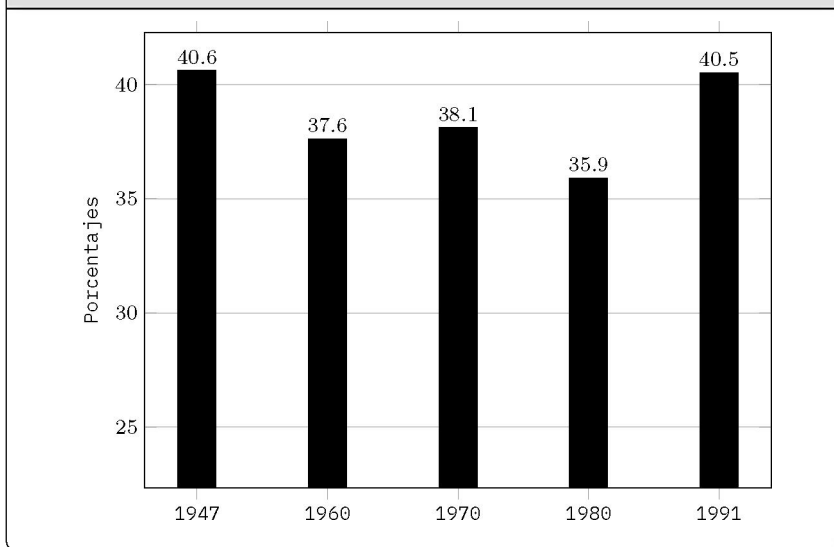
5.1 La caída de la tasa de actividad

Empecemos por el nivel de mayor agregación/abstracción: la tasa de actividad. Algunos autores enfatizaron como un factor de debilitamiento del peso social de la clase trabajadora la caída de la tasa de participación en el mercado de trabajo.

Utilizando fuentes censales, los autores que subrayaban esta tendencia (Palomino 1988; Torrado 1994) encontraban que esta caída se remontaba a la década de 1950 aproximadamente. Gradualmente, pero con una intensidad mayor durante la década de 1970, las tasas de participación fueron disminuyendo, hasta alcanzar su nivel más bajo en 1980.

Esto se interpretó como indicio de que el empleo perdía peso como mecanismo de inserción social, frente a roles e identidades que ya no se definían alrededor del «trabajo» para el mercado. En este sentido, la explicación aducida recaía sobre todo en dos fenómenos: el peso creciente de los jubilados en la estructura social, y la expansión de la

Figura 5.1. Tasa de actividad sobre la población total. Fuente: Groisman (1999). En base a censos nacionales de población.



matrícula en la enseñanza secundaria y terciaria, que iría de la mano con un ingreso más tardío de los jóvenes al mercado de trabajo.

Este proceso, registrable también vía EPH, parecía intensificarse durante la dictadura. En este sentido, algunos autores postulaban dos factores adicionales, vinculados con la caída salarial y la represión: la disminución de la inmigración, y el incremento de la emigración.

Con todo, la caída de la tasa de actividad global se debía exclusivamente a la declinante participación masculina en el mercado, parcialmente compensada por una siempre creciente tasa de participación femenina.

Sin embargo, esta interpretación tiene un conjunto de problemas a señalar, algunos de los cuales comenzaron a ser discutidos durante la época. El primero de ellos es que, en una mirada retrospectiva, sabemos que si tomamos los datos oficiales en bruto, la caída de la tasa de actividad se revirtió fuertemente ya durante la década de 1980, y más todavía durante la siguiente. Las tasas de actividad registradas fueron creciendo hasta alcanzar niveles record, acompañadas por las tasas de subocupación y desocupación abierta.

Es inevitable observar, sin embargo, que parte de ese crecimiento se debió a cambios metodológicos. En efecto, si nos atenemos a las fuen-

tes censales, la manera de medir la condición de actividad se modificó notablemente del censo de 1980 al de 1991. Bajo la premisa, a nuestro entender correcta, de que los censos anteriores la subestimaban, para 1991 se buscó mejorar la captación de un conjunto de ocupaciones irregulares, sobre todo femeninas, muchas de las cuales ni siquiera eran reconocidas como «trabajo» por quienes las efectuaban (Groisman 1999; S. Novick 2000). Los formularios censales anteriores favorecían que jubilados, estudiantes y amas de casa fueran clasificados apresuradamente como inactivos, cuando su condición no les impedía por sí misma realizar alguna actividad para el mercado, por ocasional que fuera.

El resultado fue una tasa de actividad mucho más elevada que la de 1980. En particular, la femenina creció con mucha fuerza de un censo al siguiente. Con todo, esto implicaba que los datos de ambos censos eran fundamentalmente incomparables entre sí (Groisman 1999; S. Novick 2000).

Edad	1970	1980	1991
14 a 19	29	25	26
20 a 24	44	42	52
25 a 34	34	36	54
35 a 44	28	34	53
45 a 54	24	28	48
55 a 64	14	14	28
65 y más	5	3	9

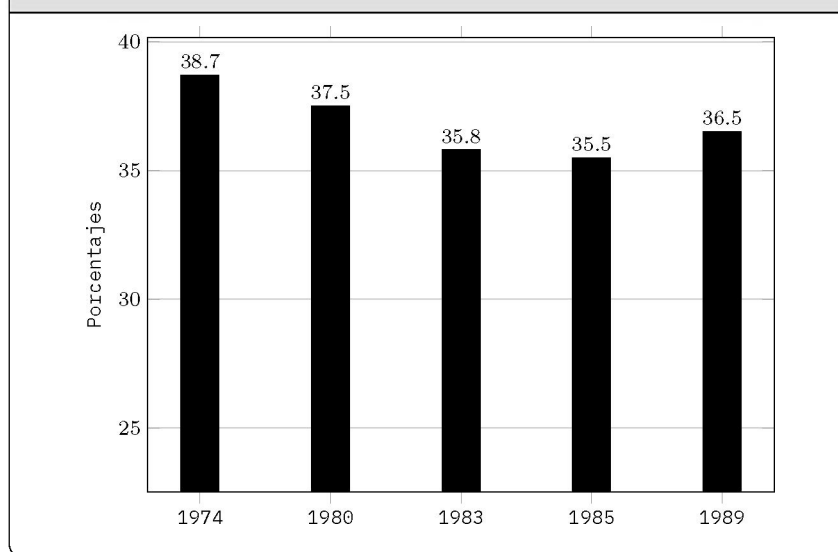
Cuadro 5.1. Tasas de actividad femeninas. En porcentajes. Fuente: Torrado (1994) para 1970 y 1980; Ariño (2010) para 1991.

Teniendo en cuenta estos cambios metodológicos y sus resultados, evidentemente la tendencia subrayada a principios de la década de 1980 de una caída de largo plazo en la tasa de actividad era parcialmente espuria. Lo que los censos anteriores captaban con mayor facilidad eran dos procesos reales: el aumento en la cantidad de jubilados, y la expansión de la matrícula secundaria y terciaria. Sin embargo, evidentemente fallaban en capturar que numerosas amas de casa, estudiantes y jubilados desarrollaban, además, algún tipo de tarea para el mercado. Es probable, aunque no podemos saberlo con exactitud, que las tasas de actividad fueran más elevadas que las medidas efectivamente.

El segundo problema es que, durante la dictadura, la caída de la tasa de actividad iba acompañada por una caída de la tasa de desocupación

oficial. Esto aparecía como paradójico, ya que si ambas tasas descendían conjuntamente, entonces cabía esperar que los asalariados ocupados, lejos de verse debilitados, resultaran favorecidos por el descenso de la competencia entre ellos. Sin embargo, era todavía más paradójico en términos empíricos, en la medida en que la disminución de la desocupación se daba en un contexto en el que además se contraía el empleo, como puede verse en la figura 5.2.

Figura 5.2. Tasas de empleo urbanas. Total de aglomerados. Fuente: Ariño (2010). En base a EPH.



Estas paradojas empíricas llevaron al debate sobre las tasas de desocupación en la dictadura, la posibilidad de que los instrumentos de medición oficiales no estuvieran captando a desocupados desalentados por las pobres perspectivas de empleo (Beccaria y Orsatti 1979), y la posibilidad de que la dictadura hubiera comenzado la recomposición de un «ejército de reserva».¹ En efecto, durante la década de 1980, con la

1.- La generación de una capa de «población sobrante» para las necesidades del capital durante la época fue tematizada desde diferentes enfoques (Iñigo Carrera y Podestá 1985, pero también quienes recuperaban el enfoque clásico de la «masa marginal»), a partir de la posible expansión de las ocupaciones irregulares, por cuenta propia o en microestablecimientos. Son posiciones atendibles pero, sin entrar en ese debate, aquí nos referimos más sencillamente al aumento de la desocupación, posibilidad señalada por E. Basualdo (2006).

profundización de la crisis, las tasas de desocupación abierta oficiales presentaron una tendencia creciente.

Algunos autores (Beccaria y Orsatti 1979; Palomino 1988) sugirieron que el posible desempleo oculto durante la dictadura respondía a una retracción de trabajadores secundarios. Sin embargo, Cortés (1990) propuso que se trataba en buena parte de jefes de hogar y varones en edades centrales, quienes aumentaron su peso sobre los inactivos y los desocupados. Esto coincide con los datos elaborados por Torrado (1994) que, al descomponer las tasas de actividad por sexo y por grupos de edad simultáneamente, muestra que la caída en 1970-1980 no estaba restringida a los grupos de edad extremos, sino que también era patente (si bien de menor intensidad) entre los varones de edades centrales.

Edad	1970	1980	1991
14 a 19	57	46	43
20 a 24	87	86	83
25 a 34	97	94	94
35 a 44	98	95	95
45 a 54	94	90	91
55 a 64	70	67	73
65 y más	29	19	27

Cuadro 5.2. Tasas de actividad masculinas por grupo de edad. En porcentajes. Fuente: Torrado (1994) para 1970 y 1980. Ariño (2010) para 1991.

De ser correctos estos datos, durante la dictadura habría comenzado un proceso de recomposición de un excedente de fuerza de trabajo flotante.

De todas maneras, queda pendiente dilucidar cómo se relaciona ese proceso con el aumento de las tasas de desocupación abierta durante la década de 1980. Más precisamente, la posibilidad de que su expansión constituya meramente un «blanqueo» de lo que durante el Proceso aparecía como un «retiro del mercado de trabajo», o si en cambio, la reconstitución de dicho excedente avanza más allá.

Finalmente, la caída de la tasa de actividad podría influir políticamente si afectara la cantidad de aportantes potenciales de la cuota sindical (Palomino 1988). Pero durante la década de 1980, cuando aumenta la primera cae la segunda, y esto es explicado mejor por el avance de la precarización y la subcontratación (Beccaria y Orsatti 1990; Pok 1992).

En conjunto, la postulación de la caída de la tasa de actividad como uno de los factores «estructurales» del cambio en las relaciones de fuerzas entre clases impuesto por la dictadura, probablemente debiera más a ciertas deficiencias de las fuentes censales que a la realidad misma. Aún más: fuera por cambios metodológicos o por procesos reales, dicha tendencia aparecería revertida en los datos a partir de mediados de la década de 1980. Y era justamente esa reversión la que permitía contabilizarla, de igual modo, como un factor debilitador de la clase trabajadora, en la medida en que se basaba en la expansión y/o mejor captación de la desocupación y la subocupación abierta. Por supuesto, el aumento de la tasa de actividad por esta expansión resulta un mecanismo conceptualmente mucho más plausible para explicar el debilitamiento de la clase trabajadora, que su caída por el mayor retiro de jubilados y estudiantes.

Pero los problemas metodológicos que presentaba la tesis de la caída de la tasa de actividad sugieren que el problema interpretativo es todavía mayor. Como sabemos, la reconstitución de un «ejército de reserva» flotante, expresada en el aumento de la desocupación abierta, fue uno de los procesos que con más fuerza debilitó a la clase trabajadora ocupada durante la década de 1990, y su comienzo puede datarse al menos a mediados de la década anterior. Pero si aceptamos que la tesis de la caída de la tasa de actividad, discutida sobre todo durante la dictadura y en los años posteriores, presenta grandes problemas metodológicos, es muy probable que la mencionada reconstitución de un «ejército de reserva» haya comenzado durante la dictadura.

Queda pendiente determinar si, ponderados los cambios metodológicos respecto a la captación de los desocupados, el gobierno de Alfonsín representó una etapa de profundización de dicho proceso, o bien meramente una etapa de «blanqueo estadístico» de una tendencia que había comenzado antes.

5.2 El cuentapropismo

Dentro de las transformaciones subrayadas por la literatura sociológica, una de las más destacadas es la expansión del cuentapropismo (Palomino 1988; Torrado 2010; Villarreal 1985).

Argumentalmente, la importancia de esta tendencia es que permitía a los autores sugerir procesos de «desalarización», por los cuales la condición asalariada perdía peso en la estructura social y, por lo tanto, también en el plano político. A menudo, la expansión del cuentapropismo aparecía fuertemente asociada con la expansión de los servicios (Palomino 1988; Villarreal 1985) que trataremos en el próximo apartado, en una ecuación en la cual la dictadura había profundizado el proceso

de «latinoamericanización» de la sociedad argentina (Villarreal 1985), reemplazando obreros industriales por trabajadores independientes.

No necesariamente existía acuerdo en cuanto a cómo debía interpretarse esta expansión en términos de cambios en la estructura de clases. Siguiendo la obra clásica de Germani (1955), los «trabajadores autónomos» tendían a ser considerados en su mayoría como parte de las «clases medias». Durante la década de 1980, la literatura se hallaba tensionada entre mantener esta caracterización (Mora y Araujo 1983; Palomino 1988; Torrado 1994), o bien asimilarlos a las actividades de subsistencia predominantes en otros países de América Latina.

El acuerdo de la literatura era que, fuera por expandir la clase media o, muy por el contrario, un estrato marginal, el crecimiento del cuentapropismo expresaba la emergencia de nuevos grupos sociales diferentes de la clase obrera en general, y de la industrial en particular. Y, al mismo tiempo, contribuía a explicar el debilitamiento de aquél grupo social o, en todo caso, la mayor heterogeneidad y dispersión organizativa de los «sectores populares» en general (Nun 1987; Palomino 1988; Villarreal 1985).

En las visiones más politicistas, la expansión del cuentapropismo desde la segunda mitad de la década de 1970, podía atribuirse en parte a los efectos de la estrategia política de la dictadura, según la célebre fórmula de Juan Villarreal de «homogeneizar por arriba y heterogeneizar por abajo». Y si el cuentapropismo debilitaba «lo obrero» en la sociedad argentina era, bien porque incentivaba ideales de independencia e individualismo aislando a una clase obrera cada vez más reducida numéricamente; bien porque aumentaba la dispersión y debilitaba y dificultaba los vínculos organizativos de los sectores populares.

Como puede verse, hallar elementos «estructurales» que explicaran el evidente cambio de las relaciones de fuerzas entre clases impuesto por la dictadura, usualmente acompañaba cierta tendencia a dar por finalizado «estructuralmente» el protagonismo político y social que los obreros y sus sindicatos habían tenido hasta 1976. Para la sociología de la época (Mora y Araujo 1983; Nun 1987; Palomino 1988; Torrado 1994; Villarreal 1985), la clase obrera argentina era más débil a la salida de la dictadura, ante todo y sobre todo, porque era *más pequeña*; porque la estructura ocupacional misma era menos «obrero» y, en cambio, más «independiente», «terciaria» e «inactiva».

Sin embargo, es posible señalar varios problemas en este tipo de interpretación en tanto explicación estructural de los cambios en las relaciones de fuerzas entre clases que, evidentemente, la década de 1980 conoció. Pero no queremos centrar la discusión en si la clase obrera

desaparecía o no, sino en la pertinencia y plausibilidad de los propios mecanismos explicativos que las lecturas sobre la época proponían.

Por lo que respecta a la expansión del cuentapropismo, lo primero que debemos señalar es que, como mecanismo explicativo, se encuentra formulado a un nivel muy general, centrándose en una única variable con un grado de agregación muy alto y no pocos problemas de medición: la categoría ocupacional, que en las estadísticas oficiales permite distinguir entre empleadores, asalariados, cuentapropistas y trabajadores familiares sin salario.

Las diversas interpretaciones que exponíamos en los párrafos precedentes, se deben lógicamente a la indeterminación y alto nivel de agregación de la categoría «trabajador por cuenta propia», que al igual que la de «asalariado», puede reconocer en su interior situaciones sociológicamente muy diversas. La mera expansión o retracción del cuentapropismo no permite, *per se*, caracterizar con precisión los procesos sociales que se hallan detrás de la variación de esta categoría censal. Para otorgar sentido teórico a las variaciones cuantitativas de una categoría tan general, cuyos límites con las otras categorías son a veces ambiguos y sujetos a debate, es preciso entonces analizar qué tipo de cuentapropistas explican su expansión o retracción; y en función de eso, cuán plausible es la variación de la categoría general como explicación del fenómeno en cuestión. Se comprenderá este punto cuando avancemos en el análisis.

Los problemas subsiguientes remiten todos a la interpretación del fenómeno a partir de lo empíricamente constatable con los datos disponibles. Un primer aspecto es conceptual, y está llamativamente ausente en buena parte de los abordajes sociológicos sobre la época, excepto en aquellos enrolados en la perspectiva del «sector informal urbano» (Tokman 1987; Tokman y Klein 1979). Se trata del largo período de crisis que el capitalismo argentino experimentó entre por lo menos 1975 y 1990, sin dudas el más largo de su historia contemporánea, y durante el cual se ensayaron diversas estrategias de reestructuración.

Ahora bien, en períodos de crisis, es usual que las tasas de inversión de capital sean bajas, dadas las expectativas poco favorables para la realización de ganancias empresarias, y que por lo tanto el empleo asalariado se estanque o disminuya, debido a la habitual estrategia empresarial de achicar planteles.

Es frecuente que una época de crisis vaya acompañada de un aumento de la desocupación, así como del intento, por parte de muchos que quedan desocupados, de buscar su subsistencia mediante cualesquiera ocupaciones que, por irregulares e inestables que sean, puedan garantizarles, al menos, algún ingreso temporario. Cuando las relacio-

nes capitalistas están tan extendidas como en la Argentina de fines de la década de 1970, y la gran mayoría de la población es urbana, no debería resultar extraño que algunas de estas ocupaciones de «refugio» sean real o formalmente «por cuenta propia». Muchas de ellas, como el cartoneo o la venta ambulante, es probable que sean, en verdad, formas de desempleo que, por no ser «abiertas», quedan parcial o totalmente encubiertas en las clasificaciones censales.

Hasta aquí, no decimos nada nuevo. El punto es que la persistencia de la crisis podía convertir a la expansión del cuentapropismo en un fenómeno meramente coyuntural. Y en la medida en que esto fuera así, entonces su capacidad explicativa se vería limitada. Podría permanecer como un factor explicativo en la coyuntura, pero entonces su papel sería muy similar al del desempleo cíclico, es decir, una de las formas del famoso «ejército industrial de reserva». Y si somos rigurosos, no sería tanto la expansión del cuentapropismo como la propia crisis de acumulación de capital, la que estaría debilitando, merced a las prácticas clásicas de la reducción de planteles y la disminución del nivel de actividad, a la clase trabajadora ocupada y sus organizaciones.

Si nuestro razonamiento es correcto, la consideración de que parte o la totalidad de la expansión del cuentapropismo – en el caso de que no fuera el producto de meros cambios de clasificación, algo sobre lo que volveremos luego – podía ser un fenómeno meramente coyuntural debido a la crisis, debería haberla relativizado como factor explicativo.

Con más razón, si la tasa de asalarización (en definitiva, de eso estamos hablando: de cuánto pesaban los asalariados sobre el total de los ocupados), hubiera sido similar en plena ISI, cuando razonablemente se podía argumentar que la clase trabajadora y sus organizaciones eran evidentemente más fuertes y jugaban un papel más protagónico que en la década de 1980, difícilmente podía argumentarse que la expansión del cuentapropismo era capaz de explicar el debilitamiento de los trabajadores a nivel de la estructura social.

Ahora bien, a la hora de analizar empíricamente este fenómeno, tenemos algunas diferencias entre los autores, las cuales dependen, en parte, de las fuentes que utilizan y de los períodos en los cuales se centran. Dependiendo de estos factores, la magnitud de la «desalarización» será mayor o menor, y con ella su relevancia explicativa.

Cuando los autores utilizan la EPH, generalmente referida al aglomerado Gran Buenos Aires (GBA), la tasa de cuentapropismo crecería tres puntos porcentuales entre 1974 y 1981 (Villarreal 1985). Los datos de Torrado, quien mide «no asalariados», son similares (aumento de 4 puntos porcentuales entre 1974 y 1986), para retornar luego a su nivel original (29 % en 1991). Teniendo en cuenta el contexto de crisis

extendida como trasfondo, los datos no resultan demasiado taxativos en cuanto a la hipótesis del debilitamiento «estructural». Incluso, la caída de los «no asalariados» entre 1986 y 1991 parece contradecir la hipótesis, toda vez que la clase trabajadora parece políticamente más débil en 1991 que en 1986.

Pero la fuente más utilizada para dar cuenta de tendencias de largo plazo, son los censos nacionales de población. Aquí aparecen buena parte de las diferencias que mencionábamos antes. En efecto, los autores difieren tanto en sus cifras como en la manera de interpretar las tendencias en los períodos intercensales. En este sentido, la más favorable a la lectura de la «desalarización» es Torrado (2010).

	1947	1960	1970	1980	1991
Palomino Total	73	72	74	72	
Groisman Total	73.9	72.1	73.8	71.6	64.6
Palomino Urbana	79	77	78	75	
Torrado Urbana	71.6	71.8	71.8	68.5	61

Cuadro 5.3. Tasa de asalarización censal. En porcentajes. Fuentes: Groisman (1999), Palomino (1988) y Torrado (2010).

Observando los datos del cuadro 5.3, podemos dividir el problema en dos: por un lado, la expansión del cuentapropismo en el período intercensal 1970-1980; y, por otro, la expansión registrada en 1980-1991.

En el primer período intercensal, la expansión es bastante más pequeña: oscila entre los dos y los 3,3 puntos porcentuales, según el autor que se tome. Aproximadamente la mitad de esa expansión se explica por los cuentapropistas de la construcción (Torrado 1994 Palomino 1987).

Ahora bien, como Palomino refiere, el empleo en la construcción es de por sí inestable, por lo que hay una fuerte fluctuación entre el empleo asalariado y por cuenta propia, dependiendo de la coyuntura que enfrente el nivel de actividad de la rama, fuertemente procíclica, y dependiente además, para su volumen, del nivel de inversión en obra pública. Nuevamente, aquí cierto elemento de crisis puede haber favorecido un incremento de cuentapropistas en la construcción.

Adicionalmente, Palomino sugiere que puede haber habido un cambio clasificatorio entre los censos de 1970 y 1980, dado que la tasa de asalarización de la construcción cae 19 puntos de uno a otro. Es probable que las tasas de asalarización de la rama sean comparativamente bajas, pero nuevamente, si estamos ante un cambio metodológico, no

podemos asegurar que haya habido además un cambio real. En todo caso, si descontamos esa mitad de la caída de la tasa de asalarización explicable por la construcción, el resto que queda sin explicar tendría una magnitud de entre 1 y 1,7 puntos porcentuales, según el autor que se tome como referencia.

En el segundo período intercensal, en cambio, la diferencia parece ser mayor: 7 puntos porcentuales. Sin embargo, en este caso parecen jugar un papel más importante las modificaciones en los instrumentos de recolección de los datos.

Efectivamente y como señalábamos antes, del Censo Poblacional de 1980 al de 1991 hubo un cambio metodológico muy importante. El censo de 1991 fue elaborado bajo la premisa de que los censos anteriores subestimaban la población activa, y tenían problemas para captar ocupaciones irregulares (Groisman 1999; S. Novick 2000). Por lo mismo, se suponía que los censos anteriores sobre-estimaban a los asalariados, en detrimento de los cuentapropistas, bajo el supuesto (discutible) de que dichas ocupaciones irregulares eran «independientes».

Con esas premisas, el dispositivo censal se modificó de tal manera de evitar que fuera el propio censado, como en las implementaciones anteriores, quien definiera su condición de actividad.² El resultado fue que el censo de 1991, además del mencionado crecimiento de la tasa de actividad, registraba una considerable caída de la tasa de asalarización. De efectuar una comparación directa entre ambos censos, la tesis de la «desalarización» parecía estar más que demostrada. Sin embargo, como vimos, y debido a los cambios metodológicos, los censos eran en buena medida incomparables (Groisman 1999; S. Novick 2000).

Varios problemas emergían, entonces: era evidente que una parte de la variación se debía al cambio metodológico, especialmente en cuanto a la mejor captación de ocupaciones irregulares, entre ellas el servicio doméstico. Ahora bien, la parte que correspondiera a dichas ocupaciones, difícilmente podía considerarse como parte de una «tendencia» en la estructura social. Es probable que dichas ocupaciones existieran también cuando se efectuaron los censos anteriores, y que efectivamente las ocupaciones más regulares y tradicionales estuvieran algo sobre-estimadas en los dispositivos previos. Si el cambio metodológico mejoró la captación del servicio doméstico, por ejemplo, no tenemos forma de saber si esa ocupación se expandió o no realmente entre los censos.

2.– Lamentablemente eran los censados quienes definían su categoría ocupacional, a diferencia de lo que sugerían los enfoques sobre precarización, como comentamos a continuación.

Existía además, como señalaban los partidarios del concepto de precariedad laboral (Beccaria y Orsatti 1990; Pok 1992), la posibilidad de que parte de los nuevos cuentapropistas fueran asalariados encubiertos. En verdad, esta posibilidad existía en los censos anteriores, pero entonces aparecía más ligada al trabajo doméstico de la industria textil (Palomino 1988). En cambio, para 1980 y 1991 era probable que hubieran avanzado no solo el empleo no registrado, sino directamente modalidades de contratación fraudulentas, tanto en el sector privado como en el Estado.

En este sentido, un riesgo que se corre en el debate sobre los cambiantes pesos de las categorías ocupacionales en la estructura social, es la posibilidad de que el cambio metodológico censal esconda como «cuentapropismo», la creciente flexibilización laboral impuesta por el capital y el Estado sobre los asalariados, y por lo tanto confunda la precarización capitalista de las relaciones asalariadas con un supuesto «reemplazo de asalariados por trabajadores independientes». Cualquiera de los dos procesos tendría relevancia para explicar el debilitamiento de la clase trabajadora, pero el mecanismo explicativo es diferente, y por lo tanto también lo es el diagnóstico: no es lo mismo interpretar que, en una época marcada por el avance del neoliberalismo, «las relaciones capitalistas están retrocediendo», que interpretar que, muy por el contrario, «se están profundizando».

Finalmente, el componente de crisis económica y baja tasa de inversión no puede desconocerse. Al momento del operativo censal de 1991 (mayo), los salarios reales se encontraban en niveles históricos muy bajos, por lo que no sería extraño que fuerzas de trabajo adicionales de los hogares humildes (amas de casa, jóvenes, jubilados) desarrollaran con más frecuencia ocupaciones irregulares para completar los ingresos domésticos (Salvia y Tissera 2000). En este sentido, la parte del crecimiento del cuentapropismo que resultara explicada por esta vía, sería *consecuencia*, y no causa, del debilitamiento de los trabajadores.

Por último, en cuanto a los problemas de clasificación, nos enfocaremos brevemente en la inclusión del servicio doméstico como sector no asalariado y, por lo tanto, cuentapropista. Distintas posturas hay sobre si esta clasificación es pertinente (Palomino 1988), y a nuestro entender la mejor opción es incluir al servicio doméstico dentro del sector asalariado dado que la cantidad de empleadores y el pago por tiempo lo asemejan mucho más a esta categoría que a las figuras clásicas del cuentapropismo. Sin embargo, más allá de esta polémica, también cabría preguntarse si la magnitud del crecimiento de esta categoría explica la evolución del cuentapropismo. Por ejemplo, Torrado (1994) considera

todo el servicio doméstico como «no asalariado», por lo cual sus tasas de asalarización son menores que las relevadas por Palomino.

En conjunto, podríamos decir que, por un lado, la magnitud y la tendencia del fenómeno quedan muy condicionadas por la fuente que se utilice. Por otro lado, si bien según datos censales, la magnitud de la «desalarización» parece ser bastante importante si miramos los extremos del período (1970-1991), la significación de los cambios metodológicos sugiere que buena parte de la misma no es, sin embargo, genuina. En este sentido, no parece plausible concluir tajantemente que el nivel de asalarización de los ochenta haya sido notoriamente inferior a los que podían registrarse en plena ISI.

Un mérito del trabajo de Palomino (1988) fue sugerir correctamente que, de todas maneras, la composición interna de los asalariados era muy diferente en 1947 o 1960 que en 1980. Pero entonces, el aumento del cuentapropismo solo podría tener una importancia secundaria y posiblemente coyuntural, frente a cambios que fueran más sustantivos y de más largo plazo.

Manteniendo la argumentación en este nivel (de la categoría ocupacional), por lo tanto, no parece posible construir una explicación suficientemente potente del cambio en las relaciones de fuerzas entre las clases a partir de 1976.

5.3 La terciarización

Finalmente, el proceso más universalmente señalado es la terciarización del empleo en general, y del asalariado en particular (Levitsky 2005; Nun 1987; Palomino 1988; Torrado 1994, 2010; Villarreal 1985), o su supuesto reverso, más fuerte, de desindustrialización (Azpiazu *et al.* 2004; Azpiazu y Schorr 2010; Ortiz y Schorr 2006).

Detrás de este consenso en la desindustrialización, hay varios factores. Por un lado, la última dictadura implicó una ruptura, también discursiva y publicitaria, en la medida en que abiertamente dejaba de declarar al desarrollo de la industria sustitutiva como un objetivo prioritario de la política pública. Adicionalmente, el cambio en los pesos relativos entre «industria» y «servicios» en el empleo es más importante que los otros fenómenos postulados, y está menos afectado por cambios metodológicos. Finalmente, pero no menos importante, existía una fuerte asociación en el imaginario político de la época entre clase obrera-industria-peronismo.

Argumentalmente, su relevancia es similar al cuentapropismo: en su versión más simple, el mayor peso relativo de los servicios reduce la clase obrera industrial, y con ella la clase obrera *tout court*. En su versión

más refinada, no la reduce sino que aumenta su heterogeneidad. Pero usualmente las dos versiones conviven.

El problema es que, si bien la terciarización puede constatarse empíricamente, no resulta sencillo interpretarla, por lo menos en dos sentidos: uno refiere a la naturaleza del proceso mismo y sus impactos económicos en la situación de los trabajadores; el otro remite a su impacto político. Nos referiremos en primera instancia a los problemas más vinculados a la historia económica del país, y luego a los que remiten a la historia política, para matizar y problematizar la manera en que las lecturas clásicas sobre el fenómeno en Argentina las conectaron.

A diferencia del cuentapropismo y la tasa de actividad, la terciarización conceptualmente se ubica a nivel de la rama de actividad, y por lo tanto es un nivel más desagregado que el de la categoría ocupacional, en la medida en que puede verificarse también como un proceso que ocurre al interior del universo asalariado.

Sin embargo, como con el cuentapropismo, tampoco hay demasiado acuerdo sobre cómo leer lo nuevo que la terciarización acarrearía, ni a qué se debe. Debido a la heterogeneidad de sectores habitualmente englobados como «terciarios», en parte se los lee como «clases medias», en parte como «estratos marginales».

Con frecuencia, el tándem desindustrialización/terciarización tiende a ser interpretado como una parte cardinal de los objetivos estratégicos de la última dictadura. Esto dota a buena parte de las lecturas elaboradas por las ciencias sociales argentinas de un cierto «politicismo», acentuado tanto en los autores nucleados en la línea FLACSO (Azpiazu *et al.* 2004; Azpiazu y Schorr 2010), como en algunos de los que discutimos aquí (Villarreal 1985). Con todo, los analistas de la estructura social citados (Torrado, Nun, Palomino, Villarreal), tienen el mérito de señalar que el aumento de la terciarización es un proceso que comienza con anterioridad al golpe de Estado de 1976, sin dejar de considerarlo como objetivo deliberado de la dictadura.

En efecto, según los censos de población la terciarización comienza en la década de 1960, en pleno apogeo de la ISI. Esto no implicaba que el empleo industrial disminuyera en términos absolutos, pero sí que la industria local, crecientemente orientada al desarrollo de ramas de mayor productividad, ya no lideraba la «absorción» del nuevo empleo generado.

Más aún: el aumento del peso relativo del empleo no industrial pareciera ser mayor de 1960 a 1970 que en la década posterior (véase cuadro 5.4). Es probable que el empleo industrial haya representado una mayor proporción en 1974/5 que en 1970, y por lo tanto que su caída hasta 1980 haya sido mayor que la capturada por los censos de

población. Sin embargo, es evidente que el avance de la terciarización del empleo asalariado era un proceso sustantivo ya durante la segunda etapa de la ISI.

	Censo			
	1947	1960	1970	1980
Industria + Minería + EGA	33	36	30	28
Construcción	7	7	10	10
Comercio	14	12	13	15
Finanzas	2	3	4	5
Otros Servicios	34	31	35	35

Cuadro 5.4. Distribución de asalariados urbanos por rama. En porcentajes. Fuente: Palomino (1988) en base a censos nacionales de población.

Teniendo en cuenta estos datos, y de sostenerse la hipótesis del efecto debilitante de la terciarización sobre la clase trabajadora, la pregunta entonces sería: ¿por qué el avance de este proceso durante la segunda etapa de la ISI no afectó su protagonismo social y político con la misma intensidad con que aparentemente lo hizo a partir de 1976? La relevancia de estos procesos para las hipótesis postuladas por la literatura sobre la década de 1980, radica en que es difícil atribuir exclusivamente a la menor proporción de empleo industrial el debilitamiento de la clase trabajadora.

En este sentido, es posible hallar algún indicio en la dinámica interna de la industria manufacturera. Como bien señalaban Nun (1987) y Palomino (1988), la composición de los trabajadores industriales sigue tendencias opuestas entre ambos períodos: de la creciente concentración en establecimientos grandes de las ramas más avanzadas en la década de 1960, a la creciente desconcentración en establecimientos más pequeños y en ramas menos avanzadas durante la década siguiente.

Como podemos ver en el cuadro 5.5, efectivamente la tendencia a partir de la dictadura parece haber sido hacia cierta desconcentración de los trabajadores industriales.

En parte, esta desconcentración se debería al cierre de establecimientos de mayor tamaño. Pero también en buena medida a la reducción de planteles, como resultado combinado de la represión, la intensificación de la explotación, la crisis sectorial, e incluso cierta reconversión tecnológica en algunas plantas (Azpiazu y Schorr 2011).

	1954	1964	1974	1974*	1984	1993
% sobre el total de asalariados en industria	48	50	56	58.8	51.7	48
Cantidad aproximada (en miles)	486	452	621	666.2	604.1	411.4
Asalariados industriales totales (en miles)	1009	909	1114	1132	1170	858

Cuadro 5.5. Cantidad y porcentaje de asalariados en establecimientos de 100 ocupados y más en la industria manufacturera. Fuente: Palomino (1988) para 1954-74. Azpiazu y Schorr (2011) para 1984-1993. En base a censos económicos. (*) 1974 según Azpiazu y Schorr (2011). Sus datos presentan leves diferencias con los de Palomino.

Cabe hipotetizar que, si la mayor concentración en ramas más intensivas podía «compensar» con creces la desindustrialización relativa durante la década de 1960, en cambio la desconcentración posterior redoblaba sus efectos, en la medida en que implicaba una pérdida del peso relativo de sectores de trabajadores con «poder de negociación estructural» (Womack 2007), y fuerte tradición organizativa. Conjugando ambos procesos (desindustrialización y desconcentración) se constituye un factor explicativo más plausible.

En efecto, la industria no parecía tener una mayor concentración en 1993 que en pleno primer peronismo; o a la salida de la dictadura respecto a la época de oro del vandomismo (cuadro 5.5). No debería ser tan sorprendente este dato, si se tiene en cuenta que la industria capitalista en Argentina estaba en buena medida compuesta por ramas livianas en las primeras etapas de la ISI, y que la mayoría de los historiadores económicos sitúan recién a fines de la década de 1950 el comienzo del desarrollo local de ramas más pesadas y más concentradas (Belini y Korol 2012).

Más allá de los obreros de grandes plantas industriales, desde la década de 1960 también perdían peso relativo sectores de servicios que habían sido parte del núcleo del movimiento obrero de mediados de siglo, particularmente en el transporte y las comunicaciones. Este proceso se habría intensificado con el achicamiento del sector ferroviario estatal durante la dictadura (Palomino 1988).

En este sentido, quizás pudiéramos construir una hipótesis más plausible si dotamos de cierta historicidad a la manera en que se interpretan los cambios en la estructura ocupacional y su vinculación con

las relaciones de fuerzas entre clases. En efecto, más allá de la desindustrialización, tendían a reducirse los puestos que habían sido los núcleos del movimiento obrero de posguerra, al mismo tiempo que tendían a expandirse otras ocupaciones asalariadas en las que la organización y el conflicto colectivo eran más difíciles (por características estructurales), o bien más recientes e incipientes, en la medida en que se trataba de empleos tradicionalmente asociados con un status de «clase media», aún cuando sus condiciones laborales se hubieran deteriorado en las décadas que nos ocupan.

Entre las primeras, podemos contar la construcción, única rama en expansión siempre considerada como parte de la clase obrera. Sin embargo, al carácter típicamente temporario y precario de sus puestos sumaba un desempeño particularmente errático durante nuestro período, con cierto crecimiento en 1976-1980, y un verdadero desplome a partir de entonces.

Entre las últimas deberíamos contar ante todo a la enseñanza, los servicios de salud, la administración pública y los servicios financieros: sectores en expansión y que venían desarrollando procesos de creciente sindicalización y conflictividad laboral, los cuales se intensificaron tras el regreso del régimen constitucional. Solo el empleo bancario constituye una excepción parcial, ya que presentó una dinámica similar a la de la construcción, disminuyendo significativamente tras la crisis financiera de 1980.³

Por último, combinando ambas dimensiones (condiciones desfavorables para la organización, y estatus tradicional de clase media), podríamos incluir al sector de comercio, en el cual predominaban ampliamente los pequeños establecimientos, así como a parte de los servicios empresariales, que prácticamente duplicaron su peso durante estos años, y suelen incluir a trabajadores subcontratados de la industria. Esto último podría estar dando cuenta del avance de procesos de reestructuración en el sector secundario.

Muchos autores han señalado, correctamente, que este avance de la subcontratación durante el período 1975-1990, implica que parte de la desindustrialización constituye en realidad un artificio estadístico: buena parte de los trabajadores externalizados pasaron a estar empleados

3.- Según Gerchunoff y Llach (1998), entre 1977 y 1980 por la reforma financiera y las políticas de tasas y tipo de cambio se pasa de 119 a 219 bancos. Solo con la crisis financiera del Banco de Intercambio Regional (BIR) en 1980, devenida por las mismas políticas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) liquida o interviene 60 entidades. Luego de nuevas modificaciones en la legislación financiera, y en el marco de la crisis previa al Plan Austral, ocurre una nueva ola de quiebras.

por empresas de servicios, incluso cuando seguían desarrollando las mismas tareas que antes, y dentro de las mismas instalaciones. Lamentablemente, hay escasos datos oficiales acerca de la evolución de este tipo de empleos, aunque hacia fines de la década de 1980 el asunto comenzó a cobrar alguna presencia en la agenda de investigación (varios artículos en Galin y M. Novick (1990), por ejemplo).

En el mismo sentido, también las estrategias de captación de ocupaciones irregulares puestas en marcha tras el Censo de 1980 pueden haber ayudado a «inflar» un poco el fenómeno de la terciarización. De cualquier manera, y a diferencia del resto de los procesos considerados aquí, la terciarización del empleo es un proceso prácticamente incontestable como tal. Es evidente que en el empleo, urbano en particular, comenzaron a tener cada vez más peso ocupaciones como docentes, empleados de comercio, etcétera. En este sentido, los autores de la época acertaron en subrayar los cambios en la composición sectorial del empleo.

Sin embargo, su interpretación es compleja: por un lado, este tipo de ocupaciones es más heterogéneo que los empleos industriales y/o agropecuarios. Por otro lado, a menos que suscribamos una teoría de la sociedad posindustrial, no sería sencillo sostener que el sector servicios pasa a predominar en el empleo porque lidera el crecimiento económico o la dinámica de la acumulación de capital.

Uno de los aspectos más disruptivos de la terciarización es la dificultad de aprehenderla con los marcos de interpretación tradicionales, que de manera un tanto lineal vinculaban «los sectores que impulsan el crecimiento de la economía en cada época», con la mayor presencia de los ocupados en esos mismos sectores en la estructura del empleo. Retomando los cánones clásicos de la historia económica argentina: al modelo agroexportador le correspondía una estructura ocupacional que, a pesar de su grado de urbanización, todavía presentaba un peso importante de las ocupaciones rurales; a la industrialización sustitutiva correspondía el creciente predominio de los obreros industriales.

Dicha visión es conceptualmente lineal y, en última instancia, poco compatible con el carácter capitalista del desarrollo económico del país. En una economía capitalista no hay linealidad posible entre la producción y el empleo, debido a las frecuentes reestructuraciones ahorradoras de mano de obra en diversos sectores. Solo soslayándolas se daría lo que implícitamente se supone: que el sector que lidera el crecimiento tiende también a liderar la generación de empleo.

Esto llevó a caracterizar la nueva estructura del empleo, más terciaria, con categorías que representaban mejor la perplejidad ante el

fenómeno que un aporte a la comprensión del mismo (vg. Nun 1987, que consideró que la nueva estructura ocupacional era «amorfa»)

Más aún, en el caso argentino, a diferencia del modelo agroexportador y de la ISI, costaría encontrar una política deliberada del Estado para expandir las actividades de servicios como estrategia básica de acumulación de capital e inserción en el mercado mundial. Podría discutirse que haya habido políticas para beneficiar al sector financiero, pero este no explica el conjunto de los servicios, y mucho menos la evolución del empleo terciario.

Enfocándonos ahora en el problema de la relación entre terciarización y procesos políticos, algunos de los trabajos más significativos que han intentado conectar ambos fenómenos para nuestro período, tienden a incorporar la caída relativa del empleo industrial en su versión más simple. El resultado es que a pesar de mostrar la concomitancia de la terciarización con otros fenómenos políticos, el intento de conectarlos suele no funcionar, incluso, a nivel estadístico. Un ejemplo de ello es el clásico trabajo de Levitsky (2005), aunque también se lo ha utilizado como argumento en trabajos igualmente influyentes de interpretación política (Svampa 2005).

En cualquier interpretación de la historia argentina de las últimas siete décadas, la «desindustrialización» y la terciarización juegan un papel importante en la medida en que ponen en juego qué se entiende por industria, qué se entiende por clase obrera, y las asociaciones tradicionales con que se había interpretado la conflictividad social y política de mediados de siglo: la asociación clase obrera-industria-peronismo. Así, la desindustrialización/terciarización ha sido la clave predominante para leer como «estructurales» los fenómenos políticos de la década de 1980.

La hipótesis de que «el pasaje a la sociedad posindustrial» contribuye a explicar la derrota electoral del peronismo en la década de 1980 y el desplazamiento de los sindicatos dentro de la estructura del Partido Justicialista (PJ) (Levitsky 2005) tiene grandes problemas de plausibilidad, sobre todo, retrospectiva. Si el peronismo hubiera dependido solo de los obreros industriales antes de la dictadura, ni siquiera suponiendo un voto unánime de dicho sector podríamos explicar enteramente sus caudales de votos en 1973.⁴

Por lo demás, uno de los problemas conceptuales de las hipótesis que se centran en la desindustrialización del empleo para explicar los cambios políticos en la Argentina de la época es su visión reduccionista de la clase trabajadora que había protagonizado la arena política

4.- Según el autor, «en 1973 uno de cada ocho votantes era un obrero industrial; una década más tarde, uno de cada catorce» (Levitsky 2005, pág. 130).

argentina en las décadas centrales del siglo XX, como confinada a los empleados directos de la industria manufacturera, eventualmente ampliada a los asalariados de la minería y los servicios públicos. Esto fue oportunamente señalado por los críticos marxistas de las discusiones sobre el cambio estructural en esos años (Iñigo Carrera y Podestá 1985; Lucita 1989, entre otros).

Tampoco la reducción del peso de los obreros industriales constituye un buen factor explicativo para el desplazamiento político de los sindicatos dentro de la estructura del PJ. Esto no se debe únicamente a la complejidad intrínseca de los procesos políticos que determinaron los cambios de alianzas y de estrategias al interior del peronismo. Incluso en términos más «estructurales», y por los datos disponibles (Villarreal 1985), ya en 1970 la mayor parte de los sindicatos con mayor cantidad de afiliados correspondían a sectores de servicios; incluso sectores con menor tradición sindical, como la docencia, los empleados de comercio, los empleados de la administración pública y los bancarios. Y por lo que sabemos, la organización en algunos de estos sectores avanzó todavía más después de la dictadura (véase Labourdette en este libro).

Habría que determinar, entonces, si queremos todavía hallar factores «estructurales», por qué la mayor preponderancia de estos sindicatos de servicios en cantidad de afiliados, así como su creciente protagonismo en el conflicto laboral (Bonanotte 1994) implicaba un debilitamiento de la fuerza política de la clase trabajadora.

Un argumento posible, aunque parcial, sería quizás que los trabajadores industriales están situados en un lugar neurálgico para la acumulación de capital en comparación con sus pares de servicios. Si bien es una hipótesis que parece razonable, es difícil sostenerlo respecto de sectores de los servicios de vital importancia para la reproducción capitalista como bancarios y transporte.

5.4 A modo de balance

Hasta aquí podemos decir que algunas de las transformaciones postuladas como relevantes en la literatura, especialmente para la salida de la dictadura, suelen tener problemas metodológicos y empíricos en lo que hace a su plausibilidad como factores explicativos del cambio en las relaciones de fuerzas entre clases. Y cuando esos problemas metodológicos están relativamente despejados, como en el caso de la terciarización, surgen dificultades relativas a la interpretación del proceso.

En este sentido, la caída de la tasa de actividad parece haberse debido a deficiencias metodológicas de las fuentes, y resulta revertida como mínimo desde 1985. La expansión del cuentapropismo parece deber mucho, también, a cambios metodológicos, que dificultan evaluar en

qué medida la estructura de la década de 1980 difiere, en este aspecto en particular, de la de mediados de la de 1960. Más allá del cambio metodológico, es posible que parte de la expansión registrada, comparando en bruto los datos censales, sea espuria además por clasificar erróneamente asalariados como cuentapropistas.

Sin embargo, es probable que en algún grado sea verosímil cierta «desalarización» genuina durante nuestro período. En este sentido, adujimos que una parte no menor de la misma puede deberse a un conjunto de factores que deberían llevarnos a relativizar, incluso en este caso, su relevancia como factor explicativo del cambio en las relaciones de fuerzas entre clases. Entre estos deben contarse aspectos coyunturales de «desalarización» debido a la continuidad de la crisis económica, así como la probable mayor salida de trabajadores adicionales al mercado de trabajo, como estrategia familiar para compensar la caída de los salarios reales. Adujimos también que en este caso la «desalarización» sería más una consecuencia que una causa del debilitamiento de los trabajadores.

Finalmente, la terciarización/desindustrialización del empleo en general, y del asalariado en particular, sí constituye una transformación significativa por su magnitud, y claramente duradera en la estructura ocupacional.

Sin embargo, su interpretación como factor del cambio en las relaciones de fuerzas no es sencilla. En primer lugar, porque la tendencia ya es significativa en la década de 1960, sin que implicara necesariamente un debilitamiento de los trabajadores. Esto nos llevaba a la necesidad de desagregar las tendencias al interior del empleo industrial y de servicios.

En este sentido, la terciarización no es fácil de interpretar por sus supuestas implicancias políticas. Como vimos, varios de los análisis que la incorporan como un factor clave de los cambios políticos de la época, tienden a sostener una visión reduccionista de la clase obrera que había protagonizado la arena política durante las décadas centrales del siglo XX.

Con todo, rescatamos un conjunto de elementos, tanto estructurales como históricos, que permitirían construir una explicación más plausible.

Por un lado, rescatamos el factor de crisis, con sus posibles consecuencias en la estructura ocupacional. En ese sentido, buscamos reinstalar la pregunta por la evolución de la desocupación durante la dictadura, hipotetizando que fue entonces que comenzó la recomposición de un ejército de reserva abierto en el capitalismo argentino.

Dejamos abierta la pregunta acerca de cómo debe interpretarse entonces la evolución de la desocupación durante la década de 1980.

Rescatamos asimismo la posibilidad de construir una mejor explicación incorporando una lectura más histórica de los cambios estructurales, en torno al proceso de terciarización del empleo asalariado. Adujimos que las dinámicas tanto del empleo industrial como de servicios contribuyeron a reducir el peso de los sectores tradicionalmente más fuertes del movimiento obrero: obreros de grandes establecimientos industriales, ferroviarios, etcétera. Al tiempo, esas dinámicas favorecían la expansión de sectores que, o bien se hallaban en peores condiciones para la organización de sus intereses como trabajadores (comercio, servicios empresariales, construcción hasta 1980), o bien poseían una tradición organizativa mucho menor y más reciente (bancarios, docentes, etcétera), debido en buena medida a su status tradicional como «clases medias». Sin embargo, en la época experimentaban un significativo empeoramiento de sus condiciones laborales, así como una creciente conflictividad laboral, materia en la cual su protagonismo incluso se intensificaría en las décadas siguientes.

Finalmente, dejamos fuera otros procesos, recuperados en la literatura sobre la segunda mitad de la década de 1980 (precarización, subcontratación, aumento de la desocupación, etcétera). Su relevancia como factores explicativos es evidente, pero tienen menor presencia en la literatura sobre la primera mitad de la misma década, aún cuando cabe hipotetizar que su expansión había comenzado durante dicho período, tal como sostuvimos respecto a la desocupación abierta. En síntesis, la complejidad de cada uno de estos procesos (aquí nos detuvimos solamente en los primeros) requiere una mayor investigación para analizar sus conexiones con los cambios en las relaciones de fuerzas entre clases.

Con todo, creemos que es suficiente para observar que son los cambios en las relaciones laborales entre empleadores y asalariados los que más razonablemente pueden dar cuenta del debilitamiento de los trabajadores durante nuestro período. Asimismo, como sostuvimos, para construir una explicación plausible es preciso comprenderlos tanto en términos «estructurales» como históricos, teniendo en cuenta que la construcción de una explicación adecuada requiere el análisis de la relación entre procesos que se registran a diferentes niveles de agregación, además de prestar atención a posibles cambios en los fenómenos que reflejan las categorías estadísticas.

Con el recorrido que hemos hecho, podemos afirmar que, si bien es posible constatar cambios significativos en la estructura ocupacional durante las décadas de 1970 y 1980, son acotados los alcances expli-

cativos de la lectura causal directa, explicitada durante la década de 1980 pero asumida como consenso por los estudios sobre estructura ocupacional, que se asumió para interpretar la correlación entre modificaciones en la estructura ocupacional y cambio en las relaciones de fuerzas. Aún en los trabajos donde se atinaba a subrayar la necesidad de comprender procesos políticos coyunturales, estas modificaciones en la estructura ocupacional siguen estando presentes con fuerza de marco general explicativo.

Sin desestimar los cambios estructurales, creemos que el impacto que en la época tuvo la hasta entonces inédita derrota del peronismo en elecciones sin proscripción (bajo el fuerte presupuesto de la ligazón ISI-clase obrera industrial-peronismo) tuvo un efecto, en los estudios sobre estructura ocupacional, de sobredimensión del aspecto estructural que soslayó la importancia de problemas estrictamente coyunturales.

Por tomar un ejemplo posible presente en la literatura ligada a la historia política, el posicionamiento del peronismo frente a la autoamnistía militar por los delitos cometidos en el marco del terrorismo de estado puede explicar, en parte, que muchos trabajadores tradicionalmente identificados con esa fuerza política que fueron víctimas de la represión militar optaran por cambiar su voto sin entrar en contradicción con su propia identidad.

Y es que las modificaciones en la estructura ocupacional terminaron funcionando como «determinante en última instancia» de las debilidades de los trabajadores para enfrentar un contexto tan crítico, desdibujando la dinámica de relaciones de fuerzas como un producto.

En este sentido, y en términos de estricta reflexión sobre fortaleza/debilidad, no está de más señalar que cuando se relevan estas dinámicas ocupacionales rara vez se encuentran reflexiones sobre las tradiciones y peso sindical de los distintos gremios que agrupan a las categorías desagregadas de los trabajadores de cada una de las ramas de la producción, siendo muy distintas dentro del sector servicios, por ejemplo, entre ferroviarios, docentes, comercio, bancarios, estatales, etcétera.

En el caso de la interpretación de la terciarización se hace más claro que los presupuestos sobre qué se entiende por industria, «desindustrialización», clase obrera, y cómo se piensa que ello redundará en el peso político de los trabajadores, llevó a leer como «estructurales» fenómenos coyunturales y hasta estrictamente políticos de la década de 1980.

Pareciera haber un *quid pro quo* que supone que al correlacionar cambios en la estructura ocupacional con comportamientos políticos inéditos, los nuevos comportamientos políticos constatados pasan por expresiones de relaciones de fuerzas estructurales.

Muchas de las aparentes paradojas empíricas que emergen al relevar los datos devienen, más bien, de marcos de lectura tradicionales que deberían complejizarse para empezar a dar respuestas más adecuadas a un problema como el del peso social y político de los trabajadores que, acordamos, es de primer orden no solo para las ciencias sociales.